**RECURSOS DE APELACIÓN Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA**

**EXPEDIENTES:** TEEA-RAP-012/2023 Y ACUMULADOS.

**PARTE RECURRENTE:** Partido Acción Nacional y otros.

**AUTORIDAD RESPONSABLE:** Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

**MAGISTRATURA PONENTE**:Héctor Salvador Hernández Gallegos.

**SecretarIADO DE ESTUDIO:** Daniela Vega Rangel.

**COLABORÓ:** Ericka Ivette Rodríguez Martínez y Diego Felipe Valadez Gómez.

**Aguascalientes, Aguascalientes, a veinticuatro de noviembre del dos mil veintitrés.**

**Sentencia** que **MODIFICA** en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo CG-A-47/23, de fecha veintisiete de octubre del dos mil veintitrés, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (Autoridad Responsable), mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas, en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes(Acto Impugnado/Reclamado), impugnado por el Partido Político Acción Nacional y otros.

Las fechas enunciadas deben entenderse referidas al año dos mil veintitrés, salvo señalamiento expreso en contrario.

**I. ANTECEDENTES**

De las constancias de autos y de las afirmaciones realizadas por las partes promoventes, se advierten los siguientes hechos relevantes:

**1. Proceso Electoral Local 2023-2024.**

El cuatro de octubre, inició el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en el Estado de Aguascalientes, en el que se renovarán 27 Diputaciones y 11 Ayuntamientos.[[1]](#footnote-1)

**2. Acuerdo CG-A-47/23.**

El veintisiete de octubre, la Autoridad Responsable emitió el Acuerdo identificado con la clave CG-A-47/23, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas, en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.[[2]](#footnote-2)

**3. Recursos de Apelación.**

En fecha treinta y uno de octubre, los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional (Partidos Recurrentes) presentaron medios de impugnación en contra del Acuerdo precisado en el numeral anterior, en virtud de que, a su consideración, la Autoridad Responsable: **i)** vulneró lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal), referente a que no se puede privar a su partido representado de derecho alguno, sino solamente a través de un juicio seguido ante los tribunales y que el acto de molestia debe ser debidamente fundado y motivado y emitido por autoridad competente, puesto que pretende atribuirse facultades reservadas al Congreso Local; **ii)** violenta los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos; **iii)** que el criterio adoptado es inconsistente, pues señala que la elección que habrá de tomarse en consideración para la postulación de las candidaturas a los grupos de atención prioritaria, lo es el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021; y, **iv)** violenta principios constitucionales y de legalidad, al ser extemporáneo.

**4. Recepción, acumulación, turno y radicación de los Recursos de Apelación (TEEA-RAP-012/2023 y TEEA-RAP-014/2023).**

El tres de noviembre, la Autoridad Responsable remitió a este Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (Tribunal Electoral) los Recursos de Apelación presentados por los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), así como el informe circunstanciado de los sendos recursos, los cuales se registraron y tras advertir la identidad del Acto Impugnado, así como la pretensión de los Partidos Recurrentes, se acordó su acumulación.

En fecha cuatro de noviembre, se turnaron los medios de impugnación en cuestión, a la Ponencia del Magistrado Presidente, Héctor Salvador Hernández Gallegos,[[3]](#footnote-3) radicándolos el seis de noviembre.[[4]](#footnote-4)

**5. Publicación del Acuerdo CG-A-47/23 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.**

El Acto Impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el seis de noviembre.[[5]](#footnote-5)

**6. Admisión.**

El nueve de noviembre, la Magistratura instructora, admitió los medios de impugnación referidos en el numeral 4.[[6]](#footnote-6)

**7. Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.**

El siete de noviembre, Moisés Segundo Ortiz, Flora Romualdo Gonzalo, Crispín Jesús Gracida Rodríguez, Isabel Silverio Vicente, Jhovany Hernández Serrano, Yolanda González De la Cruz, Zeferina Hernández López, Rosa López Cárdenas, José Martínez Zamorano, Maribel Camilo Victoriano, Lourdes Galindo López, Antonia Victoriano Marcos, Alicia Ramírez Sánchez, Bernabé Galindo López, Moisés Segundo Martínez, Gabriela Marín Romero, Marcela González Reza, Amalia De la Cruz Reza, Concepción González Reza, Rodrigo Camilo Victoriano y Claudia González Reza (Partes Promoventes), auto adscribiéndose como personas pertenecientes a las poblaciones y/o comunidades y/o naciones mexicanas, presentaron medios de impugnación en contra del Acuerdo precisado en el numeral 2, en virtud de que, la Autoridad Responsable omitió incluir a los pueblos, y/o comunidades indígenas y/o naciones mexicanas en las cuotas y/o acciones afirmativas para los cargos de elección popular.

**8. Recepción, acumulación, turno y radicación de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (TEEA-JDC-004/2023, TEEA-JDC-005/2023, TEEA-JDC-006/2023, TEEA-JDC-007/2023, TEEA-JDC-008/2023, TEEA-JDC-009/2023, TEEA-JDC-010/2023, TEEA-JDC-011/2023, TEEA-JDC-012/2023, TEEA-JDC-013/2023, TEEA-JDC-014/2023, TEEA-JDC-015/2023, TEEA-JDC-016/2023, TEEA-JDC-017/2023, TEEA-JDC-018/2023, TEEA-JDC-019/2023, TEEA-JDC-020/2023, TEEA-JDC-021/2023, TEEA-JDC-022/2023, TEEA-JDC-023/2023 y TEEA-JDC-024/2023).**

El diez de noviembre, la Autoridad Responsable remitió a este Tribunal Electoral los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía presentados por las Partes Promoventes, así como el informe circunstanciado de los sendos juicios, los cuales se registraron y tras advertir la identidad del acto impugnado, así como la pretensión de las Partes Promoventes, se acordó su acumulación al Recurso de Apelación **TEEA-RAP-012/2023** **y su acumulado**.

En la misma fecha, se turnaron los medios de impugnación en cuestión, a la Ponencia a cargo del Magistrado Presidente, Héctor Salvador Hernández Gallegos,[[7]](#footnote-7) radicándolos el trece de noviembre.[[8]](#footnote-8)

**9. Admisión y cierre de instrucción.**

El dieciséis de noviembre, la Magistratura que preside, admitió los medios de impugnación y al no existir trámite pendiente por desahogar, ordenó el cierre de instrucción.[[9]](#footnote-9)

**II. CONSIDERACIONES**

**PRIMERA. Jurisdicción y competencia.**

Este Tribunal Electoral tiene jurisdicción para resolver los presentes medios de impugnación, al establecerse como el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral en el Estado de Aguascalientes.[[10]](#footnote-10)

Además, por razón de materia y territorio, es competente para conocer de los asuntos por tratarse de Recursos de Apelación y Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, presentados por Partidos Políticos y personas ciudadanas, para controvertir el Acuerdo emitido por la Autoridad Responsable, en el que aprobó los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas, en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.[[11]](#footnote-11)

**SEGUNDA. Causas de improcedencia.**

Este Tribunal Electoral, de conformidad con el artículo 303 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes (Código Electoral), tiene el deber de estudiar de oficio las causales de improcedencia que pudieran actualizarse, en razón de que son una cuestión de orden público y de estudio preferente, las aleguen o no las partes, pues de actualizarse alguna de ellas, constituye un obstáculo procesal que impide a este órgano jurisdiccional realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada.

En los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía **TEEA-JDC-005/2023, TEEA-JDC-011/2023, TEEA-JDC-012/2023, TEEA-JDC-022/2023, TEEA-JDC-023/2023 y TEEA-JDC-024/2023**, la Autoridad Responsable hace valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 304, fracción IV, del Código Electoral, relativa a cuando un medio de impugnación no reúna los requisitos señalados en dicho Código, mismos que se encuentran en el numeral 302, fracción III, así como en el 307, fracción II, por no haber acompañado el o los documentos necesarios para acreditar la personería de las personas promoventes.

Si bien en el numeral 302 del Código Electoral que invoca la Autoridad Responsable se prevé en su fracción III como requisito *“…Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del recurrente, salvo que los mismos ya obren ante la autoridad responsable …”,* lo cierto es, que vale aclarar que éstos sólo pueden exigirse en aquellos casos en los que la persona compareciente y suscriptora del escrito inicial se ostente como representante o apoderado de alguna otra persona, ya sea física o moral, y la propia ley exija la demostración de alguna calidad especial que legitime al interesado, pero no en los que el impulsor del procedimiento, trámite o medio de defensa lo haga a su nombre y en ejercicio de una acción o potestad que le es propia.[[12]](#footnote-12)

En consecuencia, este Tribunal Electoral considera que dicha causal no se actualiza, pues de la lectura de los sendos Juicios, no se desprende que comparezcan en representación legal de alguna persona física o moral; si bien es cierto, de los anexos de los juicios referidos en el párrafo que antecede, no se advierte copia de sus identificaciones, los cierto es que, para acreditar la personalidad, cuando se acude ante alguna autoridad de manera directa, en defensa de algún derecho que le es propio, o para presentar alguna denuncia de hechos, se agota generalmente con el asentamiento del nombre y la firma autógrafa del compareciente, elementos que en estos casos son los únicos exigibles por constituir los mínimos necesarios para conocer a la parte promovente y su voluntad de ejercer el derecho de acción respectivo o el de hacer del conocimiento de la autoridad hechos que pueden o no ser constitutivos de faltas a la normatividad, en este caso electoral, atendiendo además al principio de buena fe que rige también los actos de los particulares y de las autoridades.

Además, si bien existen requisitos que deben ser colmados para efecto de dar entrada o trámite a las promociones, quejas, denuncias; o bien para que se admitan los medios de defensa, ya sea administrativos o jurisdiccionales, éstos no son exigibles en todos los casos, ni bajo cualquier supuesto. Antes bien, debe ponderarse que estos requisitos deben ser los que guarden una relación lógica, congruente y proporcional con el tipo de escrito, denuncia o medio de defensa que se intente, así como en relación con las cargas probatorias para las partes en los mismos, que cada procedimiento amerite, lo que nos permite concluir que además de existir requisitos generales que son inherentes a cualquier procedimiento, existen otros que son requeridos de manera especial como producto o necesidad propia del que se inicie o pretenda agotar.

Aunado a lo anterior, es preciso decir que, las Partes Promoventes se auto adscriben como personas indígenas, por lo que cobran aplicación las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de los que México es parte, referentes a los pueblos indígenas y personas que las integran.

Por ello, la auto adscripción es suficiente para acreditar la legitimación para promover el medio de impugnación intentado con el carácter de integrante de una comunidad indígena, con el objeto de que se tutelen sus derechos, acorde con la Constitución y las normas consuetudinarias respectivas.[[13]](#footnote-13)

En consecuencia, si las Partes Promoventes se auto adscriben como pertenecientes a las poblaciones y/o comunidades y/o naciones mexicanas y promueven los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en defensa del derecho de las personas habitantes de su comunidad, cuentan con legitimación, ya que la referida auto adscripción es suficiente para considerar que existe un vínculo con su comunidad y reconocerles como integrantes de la misma; por lo que para este Tribunal Electoral queda satisfecho este requisito, y se acredita la legitimación de las Partes Promoventes para presentar los juicios con el objeto de que se tutelen sus derechos conforme a las normas constitucionales y sus sistemas normativos.

Finalmente, del análisis oficioso este Tribunal Electoral, no advierte causal de desechamiento, improcedencia o sobreseimiento que impida el análisis de fondo.

**TERCERA. Procedencia.**

Respecto a las demandas de los dos Recursos de Apelación, así como de los veintiún Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, se considera que cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 302 y 307, fracciones I y II, del Código Electoral, así como con el artículo 4° de los Lineamientos para la tramitación, sustanciación y resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, el Juicio Electoral, y el Asunto General, competencia del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes,[[14]](#footnote-14) de acuerdo con lo siguiente:

**1. Forma.** Las demandas cumplen el presente requisito porque: **a)** fueron presentadas por escrito ante la Autoridad Responsable, **b)** hacen constar el nombre de la parte impugnante, **c)** identifican el acto impugnado; y, **d)** se enuncian los hechos y agravios en los que se basa su impugnación, así como los preceptos presuntamente violados.

**2. Oportunidad**. Los medios de impugnación fueron presentados en tiempo y forma, como se explica a continuación:

**Recursos de Apelación**

Por cuanto hace a los Recursos de Apelación **TEEA-RAP-012/2023 y TEEA-RAP-014/2023**, fueron interpuestosante la Autoridad Responsable el treinta y uno de octubre, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días, ya que el Acto Impugnado les fue notificado el veintisiete de octubre.[[15]](#footnote-15)

**Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (veintiún Juicios)**

El Acto Impugnado fue aprobado el veintisiete de octubre y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el seis de noviembre;[[16]](#footnote-16) las demandas fueron presentadas ante la Autoridad Responsable el siete de noviembre, por tanto, fueron promovidas dentro del plazo legal de cuatro días.[[17]](#footnote-17)

**3. Legitimación y personería.** Los Recursos de Apelación fueron interpuestos por los Partidos Políticos PAN y PRI, por conducto de sus representaciones suplente y propietario respectivamente, calidades que les fueron reconocidas por la Autoridad Responsable y que fueron acreditadas conforme a las constancias expedidas.

Por su parte, los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, fueron promovidos por personas ciudadanas auto adscribiéndose como personas pertenecientes a las poblaciones y/o comunidades y/o naciones mexicanas, que comparecen aduciendo que el Acto Impugnado vulnera sus derechos político-electorales.

**4.** **Definitividad.** También se cumple este requisito, porque la ley electoral no prevé algún otro medio de impugnación que deba ser agotado previamente.

**CUARTA. Pretensión.**

De los escritos de demanda se advierte que la pretensión de los Partidos Recurrentes es, que se modifique o revoque el Acto Reclamado, al considerar que la Autoridad Responsable se excedió en sus facultades reglamentarias, pues consideran que arbitrariamente impuso reglas antijurídicas e inconstitucionales, que violan la autodeterminación de los partidos políticos, así como el principio de reserva de ley.

Mientras que, del análisis realizado a la totalidad de demandas de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, es dable concluir que la pretensión de las Partes Promoventes es la misma, ya que se presentaron escritos idénticos, y esta consiste en que se modifique el Acto Impugnado, pues, a su consideración, la Autoridad Responsable omitió considerar una acción afirmativa para los pueblos y/o comunidades indígenas y/o naciones mexicanas.

**QUINTA. Acto reclamado.**

Lo constituye el Acuerdo CG-A-47/23 de fecha veintisiete de octubre en el que la Autoridad Responsable aprobó los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas, en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.

**SEXTA. Síntesis de agravios.**

De los agravios contenidos en los escritos de demanda de los Recursos de Apelación presentados por los Partidos Recurrentes, se pueden extraer temáticas comunes, los cuales se sintetizan de la siguiente manera:[[18]](#footnote-18)

1. El Acto Impugnado carece de debida fundamentación y motivación, ya que la Autoridad Responsable no es competente para emitir los lineamientos impugnados;
2. La Autoridad Responsable carece de competencia para aprobar dichos lineamientos, puesto que pretende atribuirse facultades reservadas al Congreso Local;
3. El Acto Reclamado resulta violatorio del principio de reserva de ley, ya que invade el ámbito constitucional de competencias del órgano legislativo;
4. El Acto Reclamado resulta violatorio de los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos que implica la facultad de establecer su propio régimen de organización al interior de la estructura; lo que conlleva al detrimento de los derechos y prerrogativas que la legislación en materia electoral le otorga a los partidos políticos, haciendo nugatorio el derecho a realizar procesos internos adecuados;
5. El Acto Reclamado es extemporáneo, violentando el principio de certeza, que consiste en que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales; y,
6. Es inconsistente el criterio adoptado por la Autoridad Responsable al señalar que se tomará en consideración para la postulación de candidaturas a los grupos de atención prioritaria, el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, puesto que pasa por alto la distritación y el reseccionamiento realizado en el Estado recientemente.

Agravios aducidos de manera idéntica en los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía por las Partes Promoventes:

1. La omisión de la Autoridad Responsable de no haber considerado una acción afirmativa para los pueblos y/o comunidades indígenas y/o naciones mexicanas, transgrediendo el artículo 2 de la Constitución Federal;
2. Violación al principio de progresividad;
3. No se consideró la población total indígena en Aguascalientes, ni la población indígena en cada municipio;
4. La omisión de la Autoridad Responsable de realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe a las personas indígenas.

**SÉPTIMA. Metodología.** Los agravios que exponen los Partidos Recurrentes, así como las Partes Promoventes, serán analizados de acuerdo con los temas expuestos en estos; en el entendido que los agravios comunes se analizarán de manera conjunta, lo que no genera perjuicio alguno, pues lo trascendente es que serán estudiados todos sus planteamientos.[[19]](#footnote-19)

**OCTAVA. Estudio de fondo.**

**1. Caso concreto.**

La Autoridad Responsable, aprobó los Lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, para la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas, en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.

Los Partidos Recurrentes consideran que la Autoridad Responsable: **i)** vulneró lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, referente a que no se puede privar a su partido representado de derecho alguno, sino solamente a través de un juicio seguido ante los tribunales y que el acto de molestia debe ser debidamente fundado y motivado y emitido por autoridad competente, puesto que pretende atribuirse facultades reservadas al Congreso Local; **ii)** violenta los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos; **iii)** que el criterio adoptado es inconsistente, pues señala que la elección que habrá de tomarse en consideración para la postulación de las candidaturas a los grupos de atención prioritaria, lo es el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021; y, **iv)** violenta principios constitucionales y de legalidad, al ser extemporáneo.

Por otro lado, las Partes Promoventes consideran que en el Acto Impugnado se omitió incluir a los pueblos, y/o comunidades indígenas y/o naciones mexicanas en las cuotas y/o acciones afirmativas para los cargos de elección popular.

**2. Marco normativo.**

El artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, señala que, de conformidad con las bases establecidas en esa Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.

Por su parte, el artículo 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), señala que los Organismos Públicos Locales (OPLES) están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, y de la LEGIPE, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, los OPLES son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la LEGIPE y las leyes locales correspondientes.

Al respecto, el articulo 17 base B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes (Constitución Local), dispone que el Instituto Electoral, como ente de interés público, será autoridad en la materia, actuará con autonomía en su funcionamiento, en el ejercicio de su presupuesto y con independencia en sus decisiones, y contará con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

Ergo, el artículo 66 del Código Electoral, expresa que el Instituto Electoral es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como profesional en su desempeño; gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y es el depositario del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, así como los procesos de participación ciudadana y la educación cívica en el Estado, en los términos de las leyes de la materia. Sus principios rectores serán la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, máxima publicidad, definitividad y objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.

Por su parte, el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LEGIPE, establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto.

A su vez, el artículo 7, numeral 1, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, señala que, para el cumplimiento de sus atribuciones, corresponde al Consejo expedir los reglamentos, lineamientos, criterios y demás normatividad interna necesaria para el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines del Instituto Electoral.

**Autoorganización y autodeterminación de los Partidos Políticos**

El artículo 41, fracción I, tercer párrafo de la Constitución Federal establece que las autoridades electorales únicamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señale la propia Constitución y la ley.

La Ley General de Partidos Políticos (Ley General de Partidos), en su artículo 23, numeral 1, inciso c), precisa que son derechos de los partidos políticos gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes.

Este mismo ordenamiento, en el numeral 1 de su artículo 34, precisa que los asuntos internos de los partidos políticos son aquellos actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución Federal, en la citada Ley, así como en sus Estatutos y reglamentos, entre los cuales están expresamente previstos los procedimientos para la elección de los integrantes de sus órganos internos.

También precisa que son los asuntos internos de los partidos políticos, los siguientes:

**a)** Elaborar y modificar sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

**b)** Determinar los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

**c)** La elección de los integrantes de sus órganos internos;

**d)** Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular;

**e)** Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

**f)** La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

**Derecho a la Consulta Indígena**

El artículo 2° de la Constitución Federal, es el núcleo del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en México.

Tal precepto dispone que la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, a quienes define como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Al respecto, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169) prevé, en los artículos 6, 7 y 15, la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que existe una interrelación de los conceptos de consulta y de participación, lo que implica que los pueblos y comunidades indígenas no sólo deben dar a conocer su respuesta y ser capaces de influir sobre las propuestas emprendidas desde el exterior, sino que además deben participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que les permitan construir su desarrollo.[[20]](#footnote-20)

Ahora, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ha considerado que este derecho a la consulta y participación tiene un enfoque amplio, que constituye la piedra angular del Convenio 169 y la base de todas sus disposiciones.[[21]](#footnote-21)

También, precisó que las formas y contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta deben permitir la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados, con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas, a fin de que puedan influir en los resultados y lograr un consenso que resulte aceptable para todas las partes.

De esta forma, el derecho a la consulta constituye un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeña un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[[22]](#footnote-22) establece en su artículo 19 que los Estados deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten.

De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señaló que “la falta de una consulta apropiada lleva siempre a situaciones conflictivas en que los indígenas manifiestan su cólera y su desconfianza y que, en algunos casos, han degenerado en actos de violencia”.[[23]](#footnote-23)

El Relator destacó que este **deber de consulta deriva del derecho a la libre determinación, sin el cual no podrían ejercerse plenamente los derechos de los pueblos indígenas tanto colectivos como los individuales.**

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 14 de junio de 2016, señala que es obligación de los Estados celebrar consultas con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.[[24]](#footnote-24)

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha destacado también el derecho a la consulta, al resolver el caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam que la falta de mecanismos expresos que garanticen el acceso, uso y la participación efectiva de los pueblos indígenas configura una violación del deber de adoptar las disposiciones que fueren necesarias para garantizar sus derechos.[[25]](#footnote-25)

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte),*[[26]](#footnote-26)* considera a la consulta como una prerrogativa reconocida en el artículo 2° de la Constitución Federal y en el Convenio 169, que puede ejercer cualquier integrante de la comunidad o pueblo indígena, con independencia de que se trate o no de un representante legítimo, cuyo núcleo de protección es la libre determinación de las comunidades, así como el reconocimiento de sus derechos culturales y patrimoniales.

También, expresó que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a los derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a vulnerarse, al ser uno de los objetos del procedimiento de la consulta determinar si los intereses de los pueblos resultarían perjudicados.

A partir de estos parámetros constitucionales e internacionales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior)[[27]](#footnote-27) ha considerado que el derecho a la consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas que tiene un doble aspecto: **a)** es un derecho procedimental por ser un instrumento para salvaguardar la realización de un amplio conjunto de derechos, y **b)** es también un derecho sustantivo, como expresión concreta del derecho a la libre determinación, en virtud de que participan activamente en la definición de decisiones que impactan en sus intereses y ejercicio de derechos.

El aspecto procedimental del derecho a la consulta se refiere a un conjunto de condiciones y principios que deben cumplir y observarse para validar un proceso de toma de decisiones que les puedan afectar.

Así, en las sentencias de los Juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SUP-JDC-9167/2011, relacionado con la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, así como el fallo al juicio SUP-JDC-1740/2012, referente al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, en los que se determinó la realización de consultas para preguntar a las comunidades correspondientes si era su voluntad transitar de la elección por sistema de partidos a la de derecho indígena, se determinó que para llevar a cabo la consulta deben reunirse determinados requisitos: libre, pacífica, informada, democrática, equitativa, socialmente responsable y autogestionada.

En ese sentido, el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas se traduce en la obligación del Estado de recabar su parecer antes de adoptar cualquier ley o medida administrativa que tenga impacto en las comunidades.

**3. Contestación de agravios.**

Por cuestión de metodología, los agravios serán atendidos en el orden necesario para su resolución:[[28]](#footnote-28)

**Recursos de Apelación**

El agravio identificado con el inciso ***b)***, en el que los Partidos Recurrentes, refieren que la Autoridad Responsable carece de competencia para aprobar el Acto Impugnado, resulta **infundado**, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Inicialmente, es menester traer a colación que los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, señalan que todo acto de las autoridades, debe emitirse dentro del margen de facultades otorgadas en la misma o en alguna ley secundaria.

La Suprema Corte, ha señalado que, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que **las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones**; igualmente, estimó, que en materia electoral el **principio de legalidad** significa la garantía formal para que la ciudadanía y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de i**mparcialidad** consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de **objetividad** obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de **certeza** consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, **los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican** una garantía constitucional a favor de la ciudadanía y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.[[29]](#footnote-29)

Acorde con lo anterior, la Sala Superior, señaló que las atribuciones y facultades explícitas e implícitas, de los institutos electorales, deben estar encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fueron creados[[30]](#footnote-30).

En tal sentido, conforme al artículo 66 del Código Electoral, el Instituto Electoral es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como profesional en su desempeño; gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y es el depositario del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, así como los procesos de participación ciudadana y la educación cívica en el Estado, en los términos de las leyes de la materia. Sus principios rectores serán la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, máxima publicidad, definitividad y objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.

Autonomía que se manifiesta en el ámbito normativo mediante la facultad reglamentaria, como potestad atribuida por el ordenamiento jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas generales abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de generar en el ámbito administrativo el exacto cumplimiento de la ley.[[31]](#footnote-31)

En ese orden de ideas, la Autoridad Responsable, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables en materia electoral,[[32]](#footnote-32) de los principios rectores de la materia, y, en consecuencia, la facultad para expedir los reglamentos, lineamientos, criterios y demás normatividad interna necesaria para tal fin.

A su vez, el artículo 7, numeral 1, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, señala que, para el cumplimiento de sus atribuciones, corresponde al Consejo expedir los reglamentos, lineamientos, criterios y demás normatividad interna necesaria para el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines del Instituto Electoral.

De esta manera, queda reconocida la necesidad de contar con Lineamientos expedidos por la Autoridad Responsable, por lo que puede crear normas adicionales que regulen los procedimientos, la estructura y el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral, ya sea mediante reglamentos, lineamientos y otras disposiciones de carácter general.

El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, señala que, de conformidad con las bases establecidas en esa Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.

Por su parte, el artículo 98, de la LEGIPE, señala que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esa Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Por su parte, el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LEGIPE, establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto Electoral.

Asimismo, son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes.

Al respecto, el artículo 75, del Código Electoral, establece cuáles son atribuciones del Consejo, además de las establecidas en el artículo 104 de la LEGIPE y que el Código Electoral, no confiera a otro organismo del Instituto Electoral.

De esta manera, queda reconocida la necesidad de contar con Lineamientos expedidos por la Autoridad Responsable, por lo que puede crear normas adicionales que regulen los procedimientos, la estructura y el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral, ya sea mediante reglamentos, lineamientos y otras disposiciones de carácter general, aunado a que, esta facultad necesariamente alcanza a los procesos partidistas para su selección, ya que de estos emanan las personas que serán registradas para contender por cargos públicos, por lo que deben sujetarse a los principios y bases constitucionales, convencionales y legales establecidas.[[33]](#footnote-33)

Por lo que la Autoridad Responsable sí cuenta con las atribuciones suficientes y necesarias para expedir el Acto Impugnado, de ahí que el agravio planteado por los Partidos Recurrentes resulte **infundado**.

Por cuanto hace al agravio identificado con el inciso ***c)***, tocante al principio de reserva de ley que los Partidos Recurrentes estiman vulnerado, al señalar que se violenta el artículo 3° de la Constitución Local, ya que la Autoridad Responsable pretende establecer lineamientos, siendo que la legislación no le otorga dichas facultades; además, no le autoriza para legislar del tema, ya que pretende ampliar requisitos no establecidos en la legislación electoral, imponiendo cargas impositivas, atribuyéndose facultades reservadas al Congreso del Estado de Aguascalientes, ya que en el artículo 143 del Código Electoral ya se encuentra establecido el sesgo que deben realizar los partidos políticos y coaliciones.

De igual manera, agregan que la Autoridad Responsable viola este principio, pues, si bien inserta en el Acto Impugnado los preceptos constitucionales invocados, a los que todas las autoridades deben estar sujetas en su actuar, además de las disposiciones normativas del Código Electoral, esto lo califican como violatorio pues, a su consideración, invade el ámbito constitucional de competencias del órgano legislativo, además de crear categorías y modificaciones contenidas en la Constitución y leyes electorales relacionadas con derechos fundamentales como los de ser votado para cualquier cargo de elección popular de la militancia de los partidos políticos.

Continúan señalando que no resulta erróneo que la Autoridad Responsable realice ejercicios tendientes a garantizar y exponencialmente potenciar los derechos fundamentales y medidas afirmativas, sin embargo, que esta facultad encuentra un límite, y es el aseguramiento y cumplimiento de los preceptos legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas específicas en la materia; lo cual se traduce en que los lineamientos deben respetar las disposiciones legislativas que contemplen dichas acciones, sin poder extralimitarse arbitrariamente.

Aducen, además, que es voluntad de la legislatura el reservar la facultad para emitir disposiciones en materia de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables y/o de atención prioritaria.

Este agravio se califica como **infundado**, por las siguientes razones:

Referente al principio de reserva de ley, la Suprema Corte ha establecido que este se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de determinada materia, excluyendo así la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, es decir, la legislatura ha de establecer por sí misma la regulación de la materia determinada[[34]](#footnote-34) y, la materia reservada no puede ser regulada por otros órganos mediante la emisión de normas secundarias, como reglamentos, acuerdos y lineamientos.

En ese sentido, el Acto Impugnado está encaminado a dar cumplimiento al principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal, pues la Autoridad Responsable implementó medidas que fortalecen la dimensión sustantiva del derecho a la igualdad jurídica de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad frente al resto de la ciudadanía que no se encuentra en ninguna de las categorías sospechosas, a fin de que las personas pertenecientes a estos grupos tengan condiciones reales de participar políticamente y de acceder a cargos de elección popular.[[35]](#footnote-35)

Atendiendo a lo anterior, y toda vez que las acciones afirmativas no están reservadas a la legislatura, sino que atienden al mandato del artículo 1° constitucional, **no existe** la violación al principio de reserva de ley alegado por las partes, pues la Autoridad Responsable tiene facultad de emitir acuerdos generales, así como lineamientos o reglamentos de carácter general que regulen aspectos que tengan como fin la salvaguarda de los principios constitucionales, en el caso, el de igualdad y no discriminación en la conformación del Congreso Local y los Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes.[[36]](#footnote-36)

Lo que es acorde con lo establecido por la Sala Superior en el sentido de que diversos principios constitucionales se pueden hacer efectivos mediante criterios interpretativos que potencialicen derechos fundamentales, a efecto de que estos se proyecten como auténticos mandatos de optimización.[[37]](#footnote-37)

Ahora bien, una vez establecido que la Autoridad Responsable sí es competente para emitir el Acto Impugnado, es necesario entrar al estudio del agravio contenido en el inciso ***a)***, referente a la debida fundamentación y motivación del mismo.

Los Partidos Recurrentes, señalan que la Autoridad Responsable violentó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al señalar que no se puede privar al Partido de derecho alguno, sino solamente a través de un juicio seguido ante los tribunales, que el acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado, y ser emitido por autoridad competente, lo que, a su consideración, no acontece en el Acuerdo que impugnan, ya que la Autoridad Responsable se toma atribuciones que la legislación electoral no le otorga, al establecer lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.

Dicho motivo de agravio resulta **infundado**.

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Federal contiene la garantía de legalidad, misma que a su vez conlleva la obligación de las autoridades para que todo acto se encuentre debidamente fundado y motivado.

En ese sentido, es necesario precisar que la fundamentación y motivación de los acuerdos expedidos por la Autoridad Responsable, en ejercicio de su facultad reglamentaria, se ve cumplida de diferente manera, pues para que se considere fundado, es necesario que las autoridades actúen dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución y las leyes les confiere; mientras que, para que se considere motivado, es suficiente que el acto sea emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria, y que se refiera a relaciones sociales que deban ser jurídicamente reguladas, sin que esto signifique que cada una de las disposiciones que integran los reglamentos deban ser necesariamente materia de una motivación específica.[[38]](#footnote-38)

Lo anterior, pues ha sido criterio de la Suprema Corte, que:[[39]](#footnote-39)

**1.** En un acto legislativo, el requisito de fundamentación se satisface, cuando la expedición de la ley se halla dentro de las facultades con que cuenta el cuerpo legislativo;

**2.** La motivación se satisface, cuando las leyes emitidas se refieren a relaciones sociales que requieren ser jurídicamente reguladas; y,

**3.** No hay necesidad de que todas las disposiciones integrantes de un ordenamiento deban ser materia de una motivación específica.

De manera que, si las características que revisten a los lineamientos tienen más semejanza con las de la ley, puesto que son normas de carácter abstracto, general e impersonal, que, con actos concretos, individualizados y dirigidos a personas identificables, resulta pertinente hacer la calificación de estos actos sobre los requisitos sobre los cuales se analiza la ley.

Consecuentemente, a criterio de este Tribunal Electoral, de conformidad con todo lo expuesto, y analizadas las consideraciones expuestas por la Autoridad Responsable en el Acto Reclamado, se desprende que se cumple con las exigencias constitucionales y legales de fundamentación y motivación, pues en la misma se expresaron las razones y motivos que condujeron a la determinación que adoptó y citó la ley y los preceptos en que se apoyó, y justificó legalmente su resolución señalando las razones y causas para su determinación,[[40]](#footnote-40) por lo que este agravio resulta **infundado**.

Por lo que hace al agravio identificado con el inciso ***d)***, los Partidos Recurrentes manifiestan que se violentó el Principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, contenida en los artículos 41, base primera, tercer párrafo, de la Constitución Federal, 22, apartado 5, 24, párrafo, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (sic), y 2, apartado 2, de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales contienen la libertad de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, que implica la facultad de establecer su propio régimen de organización al interior de la estructura, con el objetivo de darle identidad partidaria y hacer posible la participación política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados; situación que conlleva al detrimento de los derechos y prerrogativas que la legislación en materia electoral le otorga a los partidos políticos, haciendo nugatorio el derecho a realizar procesos internos adecuados.

Refiriendo además que, los partidos políticos poseen la facultad de determinarse, al amparo jurídico de su normatividad, la que es vinculante para sus militantes, simpatizantes y adherentes, así como para sus órganos, en tanto que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo, como toda norma jurídica, violentando la libre decisión y elección de sus candidaturas a ocupar escaños en el Congreso del Estado, de acuerdo a la lista que democráticamente aprueba la militancia, intentando modificar y alterar lo establecido en los artículos 150 y 233 del Código Electoral.

El agravio que ahora se analiza, resulta **infundado**, atendiendo a las siguientes consideraciones:

La expedición del Acto Impugnado no constituye una intromisión en la vida interna de los partidos políticos como erróneamente lo refieren los Partidos Recurrentes, ya que, conforme a la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público, y la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden;[[41]](#footnote-41) en consecuencia, el principio de autodeterminación de los partidos políticos no es absoluto, sino que coexiste con otros principios que rigen la materia electoral, guardando armonía y coherencia con el modelo de protección y maximización de los derechos humanos y por tanto, que contribuyan a la vida democrática, al posibilitar a los partidos políticos para que las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria puedan formar parte de sus órganos de gobierno y acceder a cargos de elección popular.

Como lo ha sostenido este Tribunal Electoral,[[42]](#footnote-42) si bien es cierto que los institutos políticos tienen el derecho de determinar las normas que regulen su organización interna, así como los procedimientos para llevar a cabo la selección de sus candidaturas a los cargos de elección popular, tales facultades encuentran su límite y deben armonizarse con el principio constitucional de igualdad y no discriminación.

Al respecto, es importante destacar que el marco normativo en la materia, establece la obligación hacia los partidos políticos de promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por tal motivo, el Acto Impugnado, no representa un menoscabo a la vida interna de los mismos, sino que se trata de medidas temporales que coadyuvan al cumplimiento del mandato de igualdad sustantiva y no discriminación.

Lo cual, lejos de vulnerar la vida interna de los institutos políticos, la norma cuestionada lo que intenta es armonizarla con una de las finalidades y obligaciones que le son propias, lo que no puede estimarse como un menoscabo, o bien, como una imposición de la igualdad y no discriminación sobre la vida interna de los partidos, sino como una coexistencia sana de principios dentro de los procesos de selección de candidaturas.[[43]](#footnote-43)

Ahora bien, tal como lo precisa el artículo 34 de la Ley General de Partidos, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en dicha Ley, así como en el respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

El mismo precepto legal establece que son asuntos internos de los partidos políticos, los siguientes:

**a)** La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

**b)** La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

**c)** La elección de los integrantes de sus órganos internos;

**d)** Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

**e)** Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

**f)** La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

De lo anterior, no se advierte que la Autoridad Responsable vulnere su derecho de autoorganización y autodeterminación, pues los partidos políticos podrán determinar los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en Aguascalientes, es decir, el Acto Impugnado no constituye una modificación a los métodos de postulación de candidaturas de los partidos político; de ahí que resulte **infundado** lo alegado por los partidos recurrentes.

Por su parte, en el agravio identificado con el inciso ***e)*,** el PAN manifiesta que se violenta lo dispuesto por el artículo 3° de la Constitución Local, ya que la Autoridad Responsable pretende establecer lineamientos, de manera totalmente extemporánea, toda vez que el Proceso Electoral inició el cuatro de octubre y transcurrieron en exceso los 90 días previos al inicio del proceso electoral, advirtiendo que la responsable se excedió en el ejercicio de sus facultades, realizándolo veintitrés días posteriores al inicio del proceso electoral, vulnerando así principios constitucionales y el principio de legalidad.

Este agravio deviene **infundado**, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Como bien señala el PAN, el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Federal establece que las leyes electorales, tanto federales como locales, deberán promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, sin embargo, es necesario puntualizar qué se entiende por “modificaciones legales fundamentales”.

El Pleno de la Suprema Corte ha establecido que una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, mediante la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo las autoridades electorales.[[44]](#footnote-44)

Así, para la Suprema Corte, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado.

De lo anterior es dable concluir que, con la emisión del Acto Impugnado, no se alteró el marco jurídico aplicable a la postulación de candidaturas, sino que la Autoridad Responsable, en pleno ejercicio de sus atribuciones, emitió las cuotas que estimó pertinentes para garantizar la inclusión de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos, en la postulación de candidaturas, en aras de lograr una verdadera democracia incluyente, protegiendo el principio constitucional de igualdad y no discriminación, sin transgredir los principios rectores de la materia electoral, como son la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, sino que por el contrario, la Autoridad Responsable buscó garantizar un acceso real y efectivo de las personas pertenecientes a dichos grupos, a los cargos de elección popular.

De ahí que resulte **infundado** el agravio en estudio.

Finalmente, por lo que hace al agravio marcado con el inciso ***f)***, el PRI aduce que es inconsistente el criterio adoptado por la Autoridad Responsable al señalar que se tomará en consideración para la postulación de candidaturas a los grupos de atención prioritaria, el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, puesto que pasa por alto la distritación y el reseccionamiento realizado en el Estado recientemente, por lo que no puede existir certeza jurídica sobre las condiciones suscitadas en aquel proceso electoral con respecto a este, al no haber identidad entre los dos procesos electorales en cuanto a su demarcación territorial; que tampoco puede hablarse de identidad de intención política de la ciudadanía, pues entre ambos procesos hubo otro en el que se renovó la gubernatura del Estado, cambiando los resultados por partido en los diversos distritos de la entidad.

Ha sido criterio de esta autoridad jurisdiccional, en el diverso TEEA-RAP-009/2023 Y ACUMULADOS, que dado que tomar en consideración los resultados obtenidos en la pasada elección de gubernatura, distorsionaría la construcción del parámetro para la postulación de candidaturas de grupos de atención prioritaria de los cargos que se renovarán en el presente proceso electoral, esto es, las diputaciones y Ayuntamientos del Estado. Lo anterior, pues en el proceso electoral que refiere el Partido inconforme, la ciudadanía votó para elegir un solo cargo de elección popular, esto es la titularidad del poder Ejecutivo estatal, por lo que tales resultados no resultan idóneos para evaluar las preferencias electorales respecto a la conformación del Congreso Local y los Ayuntamientos de Aguascalientes.

De tal forma, lo acordado por la Autoridad Responsable en cuanto a tomar como parámetro los resultados obtenidos de las elecciones celebradas en el marco del proceso electoral 2020-2021 -últimas en la que se eligieron los cargos a renovarse en los presentes comicios- atiende a una lógica sistemática y funcional de los procesos comiciales y de las reglas que los constituyen.

En consecuencia, este Tribunal Electoral estima que en correspondencia con el objeto y fin que pretenden procurar las acciones afirmativas impugnadas, es razonable y proporcional tomar como criterio los resultados de la elección inmediata anterior en la que se eligieron los mismos cargos públicos a renovarse en el presente proceso electoral, dado que tales datos serán los que, de manera efectiva, den cuenta de las situaciones de discriminación y/o desventaja que las personas pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria atraviesen en los procesos electivos para conformar los Ayuntamientos y distritos de que se trate.

Por tanto, contrario a lo que afirma el PRI, será a través de la medición propuesta por la Autoridad Responsable, que se hará efectiva la participación de las personas pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria, ello bajo un criterio equilibrado que les otorgue las condiciones mínimas para que puedan competir en condiciones de igualdad no sólo cuantitativa sino cualitativa.

Hacerlo de otra forma, es decir, tomar como indicador los resultados obtenidos de la pasada elección de gubernatura, distorsionaría la información sobre las preferencias electorales en los cargos de diputaciones y Ayuntamientos, dado que la naturaleza de los cargos públicos a renovarse guarda estrecha relación con la voluntad del electorado respecto a la simpatía que mantiene con los partidos políticos de las candidaturas que estos postulan.

Finalmente, se debe tener presente que la construcción de una acción afirmativa debe atender al contexto en que se aplique y del objetivo que se pretende lograr,[[45]](#footnote-45) por lo que realizar la postulación de candidaturas a partir de los resultados obtenidos en el proceso comicial concurrente de 2020-2021, otorga las condiciones adecuadas para que las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria participen en condiciones de competitividad en relación no sólo de la fuerza política que las postule, sino también con el cargo público por el que han de competir, lo que se traduce en que partirán de un punto de arranque efectivo que les permita desplegar sus atributos y capacidades en condiciones de igualdad efectiva.

De lo anterior resulta **infundado** el agravio en estudio.

**De los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía**

Los agravios aducidos por las Partes Promoventes, se plantearon de manera idéntica conforme lo siguiente:

1. La omisión de la Autoridad Responsable de no haber considerado una acción afirmativa para los pueblos y/o comunidades indígenas y/o naciones mexicanas, transgrediendo el artículo 2 de la Constitución Federal.
2. Violación al principio de progresividad.
3. No se consideró la población total indígena en Aguascalientes, ni la población indígena en cada municipio.
4. La omisión de la Autoridad Responsable de realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe a las personas indígenas.

Por cuestión de método, se considera necesario analizar lo relativo al agravio ***d)***, toda vez que, de resultar fundado, tendría como consecuencia la modificación o revocación del Acto Impugnado, atendiendo a lo siguiente:

Las etapas y fases del procedimiento para la modificación de los ordenamientos normativos es una exigencia derivada del principio de legalidad, aplicado a la esfera legislativa, como se prevé en el artículo 16 de la Constitución Federal. Pero cuando se trata de reformar, adicionar y/o derogar disposiciones jurídicas en materia electoral, el fundamento para un correcto seguimiento de las fases legislativas está estrechamente vinculado con uno de los principios rectores en la materia, que es el de certeza, como se deriva del artículo 41 de la Constitución Federal.

A la luz de los estándares constitucionales y convencionales desarrollados por la doctrina jurisprudencial tanto de la Suprema Corte, la Sala Superior, y como de la Corte IDH, cuando se está frente a una medida legislativa y las realizadas por autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, susceptibles de afectar a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, se debe reconocer un derecho a ser consultados sobre tales medidas, previo a su adopción por el órgano competente.

La Suprema Corte, ha reconocido una doble vertiente de la consulta a estos grupos: (1) como un derecho sustantivo que puede ser jurídicamente reclamado; y, (2) como un requisito constitucional del procedimiento legislativo, cuya ausencia de su cumplimiento puede generar la invalidez completa de un ordenamiento general o bien de determinadas normas que les afecten[[46]](#footnote-46).

Por su parte, la Sala Superior, ha señalado que las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados.[[47]](#footnote-47)

Cabe destacar que la Suprema Corte, ha subrayado que, para efecto de determinar si es exigible o no la obligación de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, resulta completamente irrelevante una valoración en el sentido de que la medida impugnada sea o no benéfica para tales grupos a juicio del órgano emisor.[[48]](#footnote-48)

Por tanto, la obligación de consulta representa una garantía del derecho de autodeterminación de estos pueblos y naciones indígenas, por lo que la afectación directa a la que se refiere el artículo 6.1. inciso a), del Convenio 169, no puede tener una connotación exclusivamente negativa, sino más bien se trata de una acepción mucho más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciador en la particular situación de estos pueblos y comunidades.[[49]](#footnote-49)

En tal sentido, en todo acto administrativo que afecte a las personas indígenas, debe incluirse el requisito de consulta previa, libre, informada, culturalmente apropiada y de buena fe, que deriva del artículo 6 del Convenio 169 y del artículo 2 de la Constitución Federal; ello entendido no sólo como un derecho sustantivo que les asiste en lo individual y lo colectivo a los pueblos y naciones indígenas y afromexicanas, sino también como una garantía de su autodeterminación, lo que se constituye como un mandato adicional que condiciona la validez de las normas reformadas mediante tal procedimiento.

Por lo que, todo acto que verse sobre aspectos susceptibles de afectarles directamente a personas indígenas en sus derechos a ser votadas, y a integrar un órgano de representación, o participar en la dirección de los asuntos públicos, o ejercer las funciones públicas, se está en la obligación de consultarles previamente.

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte, determinó que el derecho humano a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, debe realizarse ante la mera posibilidad de afectación o incidencia en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible acreditar el daño ni su impacto significativo; pues conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como al corpus iuris de los pueblos indígenas y tribales, el deber de realizar una consulta previa no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serán perjudicados. Es decir, más allá del "grado de afectación" que pudiese tener una determinada decisión estatal, lo relevante es tener en cuenta que, si ésta es susceptible de impactar o ser resentida por las comunidades indígenas de manera directa o diferenciada al resto de la población, resultará necesario garantizar su participación. Por ende, el nivel de impacto o magnitud de la afectación es una cuestión que debe valorarse no para determinar la procedencia de la consulta, sino para determinar si en el proceso consultivo es suficiente con tomar en cuenta las opiniones de la comunidad indígena o, por el contrario, si resulta necesario obtener su consentimiento. En el entendido de que la exigencia de consentimiento no confiere a los pueblos y las comunidades indígenas un poder de veto, sino que más bien establece la necesidad de elaborar procedimientos de consulta con el fin de hacer todo lo posible por lograr el consenso de todas las partes interesadas.[[50]](#footnote-50)

Ahora bien, la Suprema Corte, ha señalado que de conformidad con los estándares internacionales en materia de protección a los derechos de las comunidades indígenas, las características específicas del procedimiento de consulta variarán necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del impacto sobre los grupos indígenas, por lo que las autoridades deben cumplir con los estándares siguientes: **a)** previa al acto, toda vez que debe llevarse a cabo durante la fase de planificación del proyecto, con suficiente antelación al comienzo de las actividades de ejecución; **b)** culturalmente adecuada, ya que debe respetar sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones; en ese sentido, las decisiones que las comunidades indígenas tomen de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres deben respetarse en todo momento, lo que implica que las autoridades deben llevar a cabo la consulta, a través de medios e instrumentos idóneos para las comunidades indígenas, de suerte que la falta de acceso a las tecnologías de la información, no signifique un menoscabo en el ejercicio de este derecho; **c)** informada, al exigir la existencia de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para que sea comprensible, por lo que si así lo requiere el caso concreto, deberá ser proporcionada en las lenguas o idiomas de las comunidades o pueblos involucrados, así como con todos los elementos necesarios para su entendimiento, de manera que los tecnicismos científicos no constituyan una barrera para que las comunidades puedan emitir una opinión; y **d)** de buena fe, pues la consulta exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización o aquiescencia. Asimismo, debe efectuarse fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada.[[51]](#footnote-51)

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, ha señalado que el deber de consulta “es aplicable siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas **en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad.** Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona con los intereses o las condiciones específicos de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios, como es el caso de ciertas leyes.[[52]](#footnote-52)

En tal sentido, **es fundado, pero ineficaz**, el agravio planteado, toda vez que, la Autoridad Responsable, no llevó a cabo la consulta adecuada, pues como se advierte en el documento digital denominado “Diálogos por una Democracia Inclusiva”,[[53]](#footnote-53) el Instituto, no satisface los requisitos de una auténtica consulta estrecha, a partir de los parámetros establecidos por la Suprema Corte y a nivel del derecho interamericano, ya que no se demuestra que se hubieran establecido previamente criterios claros en cuanto a la forma de la consulta y la representatividad de las personas indígenas, tampoco se observa que dichos diálogos tuvieran como objetivo el propiciar consensos en el marco del respeto a las costumbres indígenas; por tanto, no se instruyó un procedimiento adecuado, formal y transparente que tuviera la finalidad llegar a un acuerdo, así como tampoco se informó de forma precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto.[[54]](#footnote-54)

**Al respecto, la Sala Superior ha señalado que, en atención al principio de definitividad, existe inviabilidad para llevar a cabo una nueva consulta, ante el hecho de que un proceso electoral en curso se encuentre avanzado**.[[55]](#footnote-55)

Por tanto, ante lo avanzado del proceso electoral en el Estado de Aguascalientes, **no es viable ordenar una nueva consulta; sin embargo,** se considera procedente vincular a la Autoridad Responsable, para que en los procesos electorales ulteriores, atienda en su justa dimensión los parámetros que ha establecido la Suprema Corte, la Sala Superior y los organismos interamericanos en materia de consultas (independientemente de la materia o grupo de atención prioritaria al que se dirige), con la finalidad de garantizar la participación efectiva y estrecha de quienes serán destinatarios de la actuación de esa autoridad.

Referente a los motivos de disensos ***a)*** y ***c),*** las Partes Promoventes, señalan que la Autoridad Responsable, no consideró acciones afirmativas a favor de la población indígena, así como tampoco consideró la población total indígena en Aguascalientes.

Son **fundados los agravios suplidos en su deficiencia,** en razón de lo siguiente:[[56]](#footnote-56)

La Sala Superior,[[57]](#footnote-57) ha señalado que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades.

Sus características principales son las siguientes:

* **Temporales:** porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen;
* **Proporcionales:** al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar;
* **Razonables y objetivas:** ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado;
* **Flexibles**: las medidas no son fijas e inmutables, sino que deben revisarse y evaluarse y modificarse en atención a la eficacia de las medidas derivado de la situación de evolución de los grupos a los que ha sido destinada.

**El objetivo central de las acciones afirmativas en materia electoral, descansa en la realización del derecho a la participación y a la representatividad política de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados e invisibilizados, por tanto, constituyen un instrumento idóneo para concretizar el pluralismo nacional.**

Al ser medias transitorias y temporales, no deben perpetuar desigualdades en contra de aquellos grupos o personas que no se ven favorecidas por las medidas adoptadas.

Al implementarse, debe evitarse que las disposiciones tengan efectos desproporcionados, por lo que no pueden ser incondicionales y absolutas.

La exigencia de que se limite el período para el cual se hayan adoptado las medidas conlleva la necesidad, tanto en el diseño e iniciación de las medidas, de un sistema continuo de seguimiento de la aplicación y los resultados que utilice métodos de evaluación cuantitativa o cualitativa, según proceda.

Se debe determinar con detenimiento las posibles consecuencias negativas para los derechos humanos de las comunidades beneficiarias de la suspensión abrupta de las medidas especiales, máxime si estas se han adoptado por un período prolongado.

**Las acciones afirmativas al tener una naturaleza flexible y no inmutable admiten modificaciones, en todo caso, debe analizarse si las nuevas medidas, razonable y objetivamente procuran una mejor participación de los grupos a los que van dirigidas.**

Ahora bien, la Autoridad Responsable, consideró que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, la **población hablante** de lengua indígena, mayor de dieciocho años es de 2,242 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS), representando el 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) del total de la población del Estado mayor de edad; y por tanto, para efectos de postulación de candidaturas por parte de partidos políticos y coaliciones, en el actual proceso, no será considerada una cuota en favor de los mismos, pues la misma no resultaría efectiva, a causa de los pocos asentamientos indígenas; y, por tanto, consideró viable, únicamente invitar a los partidos políticos, a procurar dentro de sus organismos una integración pluricultural, debiéndose observar la interseccionalidad de dichos grupos y favoreciendo su postulación de las personas pertenecientes en pueblos y comunidades indígenas del Estado de Aguascalientes, a fin de que estos sean visibilizados dentro de sus estructuras, debiendo coexistir el principio de no discriminación y la autodeterminación de los partidos políticos.

Al respecto, las personas indígenas participantes en los “Diálogos por una Democracia Inclusiva”, señalaron que: ***“es por todas y todos conocido el estudio censal del INEGI, sobre el cual consideran que se equivoca, ya que este informa que son 2,539 personas cuando en realidad la estadística supera a las 3,000 personas con diverso origen étnico”.***[[58]](#footnote-58)

Por su parte, el INE, en el ACUERDO INE/CG527/2023, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones, ante los Consejos del Instituto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre,[[59]](#footnote-59) señaló que en el Municipio de Aguascalientes, se concentra una población indígena de 60,022, personas y en el Municipio de Jesús María, 7,984, personas indígenas, sin señalar la población de otros municipios, como se muestra a continuación:



Lo anterior evidencia, un dato erróneo de población indígena en el Estado de Aguascalientes, por parte de la Autoridad Responsable, pues únicamente consideró la población hablante de lengua indígena.

Por lo tanto, no se consideró a las personas que se autoadscriben como indígenas, pues el artículo 1°, de Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes, señala que las personas, los pueblos y las comunidades indígenas gozan de los derechos reconocidos por la Constitución Federal, incluidos los Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo de la Unión con aprobación del Senado, la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, por lo que tienen **derecho a determinar su propia identidad** o **pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones,** por tanto, **la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones de esta ley, por lo cual se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:**

**I. La autodefinición** de los pueblos y las comunidades indígena (sic) de sus propios integrantes; y

**II. La autoadscripción** de una persona a la comunidad indígena.

Pues, en el Acuerdo impugnado, se desprende que únicamente, se solicitaron datos a la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del porcentaje en comparación con la población total en el Estado de Aguascalientes, sobre la población de pueblos y comunidades indígenas y afromexicana, de los 18 años en adelante, respecto de los instrumentos levantados por dicho Instituto de personas hablantes de lengua indígena y no las de las que se autoadscriben como tal.[[60]](#footnote-60)

Al respecto, la Constitución Federal, reconoce en su artículo 2º, párrafo segundo, que México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les aplican las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se autoadscriben como tales, independientemente de su lugar de residencia o si no hablan alguna lengua indígena.

En tal sentido, la Autoridad Responsable, debió realizar una recopilación exhaustiva, y solicitar datos al INE de la población indígena, así como al INEGI y otras autoridades que considere pertinentes, para determinar la densidad poblacional indígena más cercana a la realidad, en el Estado de Aguascalientes y Municipios, y conforme a los datos obtenidos, garantizando las reglas de paridad, considere las cuotas correspondientes y realice las adecuaciones pertinentes al Acuerdo Impugnado y a los lineamientos respectivos, y en su caso, destine las fórmulas correspondientes a favor de las personas indígenas.

En consecuencia, al haber alcanzado su pretensión, resulta innecesario analizar los restantes motivos de disenso.

Finalmente, no es ajeno a este Tribunal, que existe migración y desplazamiento de personas indígenas, de sus lugares de origen, por motivos económicos, de educación, y de seguridad.

Al respecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en sus artículos 1º y 2º, señalan que **los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos**, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos; además, los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, que existe un fenómeno del desplazamiento de personas indígenas que afecta o se ponen en riesgo, sus de derechos humanos, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición de facto de desprotección. Esta situación, conforme a la Convención Americana, obliga a los Estados a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis las actuaciones y prácticas de terceros particulares.[[61]](#footnote-61)

En Aguascalientes en el Artículo 2°, de Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes, expresa que en el territorio del estado de Aguascalientes actualmente no existen asentados pueblos indígenas ni comunidades indígenas que conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas y que sean conscientes de su identidad indígena, ello aún y cuando históricamente tales pueblos y comunidades existieron, puesto que los mismos fueron asimilados a la población, sin embargo se reconoce que esa población desciende de pueblos indígenas además de otros grupos sociológicos, por lo que se declara de interés general el respeto a todos los pueblos, a la cultura, la identidad, las tradiciones y las lenguas indígenas y el rescate de su riqueza.

Asimismo, reconoce que aún y cuando actualmente no existen pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio del Estado, **si existen indígenas procedentes de otras entidades federativas** o de otro país que transitan o residen temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado, **serán sujetos de las obligaciones y derechos de la presente Ley, reconociéndoles el derecho a la protección de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión, indumentaria y rasgos culturales.**

En tal sentido, este tribunal considera apartarse de la determinación expuesta en la sentencia TEEA-JDC-016/2020.

**EFECTOS.**

Al resultar fundados los agravios expuestos, se ordena a la Autoridad Responsable modificar el Acto Impugnado, conforme a lo siguiente:

**1.-** Dentro del término de diez días, deberá realizar una recopilación exhaustiva para determinar la densidad poblacional indígena en el Estado de Aguascalientes, para lo cual deberá solicitar datos al INE de la población indígena en el Estado y Municipios, así como al INEGI y otras autoridades que considere pertinentes, y conforme a los datos obtenidos, garantizando las reglas de paridad, considere las cuotas correspondientes y realice las adecuaciones pertinentes al Acuerdo Impugnado y a los lineamientos respectivos, y en su caso, destine las fórmulas correspondientes a favor de las personas indígenas.

**2.-** Una vez concluido el proceso electoral 2023-2024, respetando el principio de progresividad, deberá realizar las consultas sobre los grupos de atención prioritaria, de los cuales pretenda implementar algún tipo de acción afirmativa en su beneficio, atendiendo a los parámetros establecidos por la Suprema Corte, Sala Superior y los Organismos Interamericanos en materia de consultas.

**III. RESUELVE**

**ÚNICO.** Se **MODIFICA**, en lo que fue materia de impugnación el Acto Reclamado, conforme al apartado de efectos.

**NOTIFÍQUESE** como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por **unanimidad** de votos las Magistraturas Héctor Salvador Hernández Gallegos, Magistratura que Preside, Magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández y el Magistrado en funciones Néstor Enrique Rivera López, con voto concurrente de la Magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández, quienes actúan ante la Secretaría General de Acuerdos en funciones, quién autoriza y da fe. Conste.

**MAGISTRATURA QUE PRESIDE**

**HÉCTOR SALVADOR HERNÁNDEZ GALLEGOS**

**MAGISTRATURA**

**LAURA HORTENSIA LLAMAS HERNÁNDEZ**

**MAGISTRATURA EN FUNCIONES**

**NÉSTOR ENRIQUE RIVERA LÓPEZ**

**SECRETARÍA GENERAL**

**DE ACUERDOS EN FUNCIONES**

**JOEL VALENTÍN JIMÉNEZ ALMANZA**

1. Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes [↑](#footnote-ref-1)
2. Disponible para su consulta en <https://www.ieeags.mx/media/sesiones/2023-10-27/CG-A-47/23/11._CG-A-47-23_Acuerdo_Lineamientos_GAP_candidaturas.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Fojas 001 y 122 del expediente [↑](#footnote-ref-3)
4. Foja 176 [↑](#footnote-ref-4)
5. Disponible para su consulta en <https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/10040.pdf#page=38> [↑](#footnote-ref-5)
6. Foja 179 [↑](#footnote-ref-6)
7. Fojas 189, 298, 333, 367, 401, 435, 469, 503, 536, 569, 603, 636, 669, 702, 735, 768, 799, 830, 861, 892 y 923 [↑](#footnote-ref-7)
8. Foja 995 [↑](#footnote-ref-8)
9. Foja 999 [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículos 116, fracción IV, inciso c, párrafo quinto, e inciso l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17, apartado B, párrafos primero y quince, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículos 297, fracción II, 335, fracción II, 336 y 337 del Código Electoral y 9° y 11 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. [↑](#footnote-ref-11)
12. Este razonamiento encuentra sustento en la Jurisprudencia 36/2010 de rubro *“****PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA*.*”*** [↑](#footnote-ref-12)
13. Jurisprudencia 4/2012 de rubro *“****COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.****”* [↑](#footnote-ref-13)
14. En el caso de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículos 300, segundo párrafo y 301, del Código Electoral. [↑](#footnote-ref-15)
16. Disponible para su consulta en <https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/10040.pdf#page=38> [↑](#footnote-ref-16)
17. Es aplicable la Jurisprudencia 15/2010, de rubro: ***“COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR PERIÓDICO OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE REALIZADA”.*** [↑](#footnote-ref-17)
18. Jurisprudencia 3/2000, de rubro “***AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”*** Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5. Jurisprudencia 2/98, de rubro ***“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”*** Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. [↑](#footnote-ref-18)
19. Conforme al criterio sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: ***“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.*** [↑](#footnote-ref-19)
20. OIT, Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, Ginebra, 2013, p. 20. [↑](#footnote-ref-20)
21. Informe 2011 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, referencia: ILC/III/1ª, fecha de publicación: dieciséis de febrero de dos mil once. [↑](#footnote-ref-21)
22. Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. [↑](#footnote-ref-22)
23. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, A/HRC/12/34, emitido el 15 de julio de 2009. [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. [↑](#footnote-ref-24)
25. Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 196 y 197. [↑](#footnote-ref-25)
26. Veánse las tesis aisladas XXVII/2016, de rubro: “***PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE PROCEDA***.” Así como la tesis XXVIII/2016 de rubro: “***PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. DERECHO A SER CONSULTADOS. LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ES LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA MATERIA***.” Publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo II. También, véase la tesis aislada 1a. CCXXXVI/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte “***COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES***.” Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto 2013, Tomo 1. [↑](#footnote-ref-26)
27. Véase la tesis XII/2013 de la Sala Superior, con el rubro: “***USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES***”; así como, la tesis de rubro La tesis aislada XXIX/2016 de rubro: “***PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. DERECHO A SER CONSULTADOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU CUMPLIMIENTO***.” Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo II; así como la tesis LXXXVII/2015: “***CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS***.” Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 8, Número 17, 2015, páginas 72 y 73. [↑](#footnote-ref-27)
28. Es aplicable las jurisprudencias con números de registro digital 2011406 y 167961, sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de idéntico rubro: “***CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO”.*** [↑](#footnote-ref-28)
29. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro digital: 176707, de la Novena Época, Materias Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 111, de rubro: “***FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”.*** [↑](#footnote-ref-29)
30. Jurisprudencia 16/2010, de rubro: “***FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”.*** [↑](#footnote-ref-30)
31. Ver TEEA-JDC-151/2021 y Acumulados. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ver SUP-JRC-244/2001 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ver SUP-RAP-121/2020 [↑](#footnote-ref-33)
34. Jurisprudencia P./J. 30/2007, registro digital172521, de la Novena Época, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1515, de rubro “***FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES***”. [↑](#footnote-ref-34)
35. SUP-RAP-121/2020 y acumulados [↑](#footnote-ref-35)
36. Tal como se estableció en el expediente TEEA-RAP-009/2023 Y ACUMULADOS del índice de este Tribunal Electoral [↑](#footnote-ref-36)
37. SUP-RAP-121/2020 y acumulados [↑](#footnote-ref-37)
38. Tesis Aislada de rubro “***LEYES Y REGLAMENTOS, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE***”, con número de registro digital 237356, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Tercera Parte, página 89 y Tesis Aislada de rubro “***REGLAMENTOS. SU FUNDAMENTACION Y MOTIVACION***”, registro digital 206211, Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 103 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ver SUP-RAP-028/99. [↑](#footnote-ref-39)
40. Es aplicable la Tesis Aislada, con número de Registro digital: 221693, de rubro: ***“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS”.***

Es aplicable la Jurisprudencia 5/2002, de rubro: “***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES)”.***

Es aplicable la Jurisprudencia 28/2009, de rubro: ***“CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”.*** [↑](#footnote-ref-40)
41. Artículo 41°, fracción I, primer párrafo de la Constitución Federal [↑](#footnote-ref-41)
42. Ver TEEA-RAP-009/2023 Y ACUMULADOS [↑](#footnote-ref-42)
43. Ver TEEA-RAP-009/2023 Y ACUMULADOS [↑](#footnote-ref-43)
44. Jurispridencia P./J. 87/2007, de rubro “***ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*.”** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 563 [↑](#footnote-ref-44)
45. Jurisprudencia 11/2015, de rubro: *“****ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES****”*, disponible para su consulta en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Acción de inconstitucionalidad 212/2020*, fallada por el Pleno de la SCJN en sesión celebrada el uno de marzo de 2021. *Acción de inconstitucionalidad 193/2020*, resuelta por el Pleno de la SCJN en sesión de 17 de mayo de 2021. *Acción de inconstitucionalidad 179/2020*, fallada por el Pleno de la SCJN en sesión de 24 de mayo de 2021. *Acción de inconstitucionalidad 214/2020*, fallada por el Pleno de la SCJN en sesión de 24 de mayo de 2021. *Acciones de inconstitucionalidad 131/2020 y su acumulada 186/2020*, resueltas por el Pleno de la SCJN en sesión de 25 de mayo de 2021. [↑](#footnote-ref-46)
47. Jurisprudencia 37/2015, de rubro: “***CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS***.” [↑](#footnote-ref-47)
48. *Acción de inconstitucionalidad 151/2017*, fallada por el Pleno de la SCJN en sesión celebrada el 28 de junio de 2018. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Acción de inconstitucionalidad 201/2020*, fallada por el Pleno de la SCJN en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2020. [↑](#footnote-ref-49)
50. Jurisprudencia con Registro digital: 2026054, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ***“DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. EL DEBER DE LLEVARLA A CABO SE ACTUALIZA ANTE LA MERA POSIBILIDAD DE QUE LA DECISIÓN ESTATAL AFECTE O INCIDA DE MANERA DIRECTA O DIFERENCIADA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, SIN QUE RESULTE EXIGIBLE LA ACREDITACIÓN DEL DAÑO Y SU IMPACTO SIGNIFICATIVO”.*** [↑](#footnote-ref-50)
51. Tesis con Registro digital: 2011956, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 1212, de rubro: “***PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. DERECHO A SER CONSULTADOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU CUMPLIMIENTO***”. [↑](#footnote-ref-51)
52. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas A/HRC/12/34 del 15 de julio de 2009, página 16, párrafo 43. [↑](#footnote-ref-52)
53. <https://www.ieeags.mx/media/carousel/dialogos%20informe%20dialogos/Informe_-_Dialogos_por_una_Democracia_Inclusiva.pdf> [↑](#footnote-ref-53)
54. Artículos 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que disponen: “***Artículo 18.*** *Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.-* ***Artículo 19.*** *Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Ver sentencia SUP-JDC-338/2023 Y ACUMULADOS, párrafos 119 y 146. [↑](#footnote-ref-55)
56. Jurisprudencia 13/2008, de rubro: “***COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES***”. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ver sentencia SUP-JDC-338/2023 Y ACUMULADOS, considerando XI, numeral 11.3, conclusiones. [↑](#footnote-ref-57)
58. Consultable en <https://www.ieeags.mx/media/carousel/dialogos%20informe%20dialogos/Informe_-_Dialogos_por_una_Democracia_Inclusiva.pdf> pag. 43. [↑](#footnote-ref-58)
59. Disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5703853&fecha=04/10/2023#gsc.tab=0 [↑](#footnote-ref-59)
60. Fracción IV, de los Resultandos, del Acto Impugnado, par. 5, pág. 2. [↑](#footnote-ref-60)
61. Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 14, párr. 179, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. [↑](#footnote-ref-61)